

00000018

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

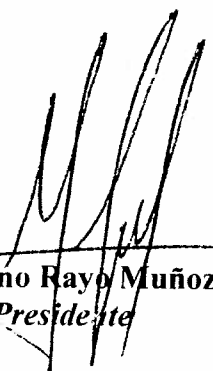
19 de julio de 2009

Señor Diputado
Roberto Alejos Cámara
Presidente de la Junta Directiva
Congreso de la República
Su Despacho

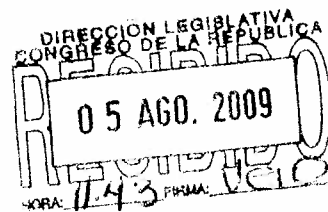
Honorable Señor Presidente:

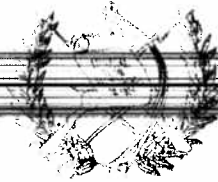
Con atento saludo me dirijo a usted, con el objeto de remitir el **Dictamen Favorable número 03-2009**, que la Comisión de Economía y Comercio Exterior emitió a las iniciativas identificadas con números de registro 3975 y 4026 las que aprueban las Reformas al Decreto número 26-95 del Congreso de la República "**Ley del Impuesto sobre Productos Financieros**", con el propósito de que se conozca y siga el trámite correspondiente para su discusión y aprobación por el Honorable Pleno del Congreso de la República.

Agradeciendo su atención, me suscribo con las muestras de consideración y alta estima.


Mariano Rayo Muñoz
Presidente

MRM/mjg
c.c. archivo





00000019

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DICTAMEN NÚMERO 03 - 2009

**De la Comisión de Economía y Comercio Exterior
a las Iniciativas de Ley 3975 y 4026
Reforma al artículo 9, del Decreto 26-95 del Congreso de la República, Ley del
Impuesto sobre Productos Financieros**

HONORABLE PLENO

Con fecha 16 de abril del 2009 el Honorable Pleno conoció la Iniciativa de Ley número de registro 3975 y el 21 de abril del 2009 la Iniciativa de Ley número de registro 4026, ambas propuestas por Diputados al Congreso de la República, y las mismas pretenden reformar, por adición, la literal c) al artículo 9 del Decreto Número 26-95 del Congreso de la República, Ley del Impuesto sobre Productos Financieros.

ANTECEDENTES

El artículo 1 del Decreto 26-95 del Congreso de la República, establece un impuesto que grava los ingresos por intereses de cualquier naturaleza, incluyendo los provenientes de los títulos-valores, públicos o privados, y que se paguen o acrediten en cuenta a personas individuales o jurídicas, domiciliadas en Guatemala, no sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.

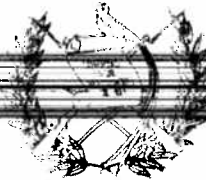
De esta cuenta, todas las personas no sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, quedaron afectas al impuesto sobre los productos financieros. Sin embargo, el artículo 9 de dicha ley, consideró exentas, entre otras entidades, a las cooperativas.

Sin embargo, la literal c) que contenía esta exención, fue derogada mediante el Decreto No. 44-2000 del Congreso de la República, vigente a partir del 01 de julio del 2000, por lo que desde esa fecha, los ingresos por intereses de cualquier naturaleza, que tengan las cooperativas, están gravados al pago de dicho impuesto.

Las dos iniciativas de ley propuestas por los diputados ponentes, pretenden restituir la literal c), específica y exclusivamente referida a la exención que gozaban las cooperativas antes de la implementación del Decreto 44-2000.

DE LA INICIATIVA DE LEY

Como se indicó anteriormente, ambas iniciativas de Ley, son congruentes con el artículo 119,



00000020

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

literal e), de la Constitución de la República, en el cual se establece que son obligaciones fundamentales del Estado, entre otras, fomentar y proteger la creación y el funcionamiento de las cooperativas, proporcionándoles la ayuda técnica y financiera necesaria.

Es por ello que los diputados ponentes de estas iniciativas, consideran oportuno, restablecer la exención a favor de dichas entidades, más no a favor de los asociados en lo personal, ya que cuando las cooperativas paguen intereses por los ahorros depositados, los asociados deberán pagar el impuesto respectivo, tal como lo establece el Artículo 2 del Decreto No. 26-95 del Congreso de la República, Ley del Impuesto sobre Productos Financieros.

El artículo 9 original del Decreto No. 26-95 del Congreso de la República, Ley del Impuesto sobre Productos Financieros, establecía lo siguiente:

"Artículo 9. De las Exenciones. Están exentos del impuesto que establece esta ley:

(...) c) Las asociaciones, fundaciones, cooperativas, los centros educativos y culturales, asociaciones deportivas, gremiales, sindicales, profesionales, partidos políticos y demás entidades religiosas y de servicio, sociales o científicas, todas legalmente autorizadas, siempre que la totalidad de los ingresos que obtengan y su patrimonio se destinen exclusivamente a los fines de su creación y en ningún caso distribuyan beneficios, utilidades o bienes entre sus integrantes (...)"

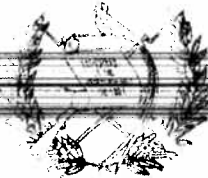
Con la modificación a dicho artículo, en el año 2000, se eliminó la consideración que gozaban las cooperativas. Los diputados ponentes restablecen dicha consideración añadiendo nuevamente la literal c), al artículo 9, de la forma siguiente:

"c) Las cooperativas legalmente autorizadas, siempre que la totalidad de los ingresos que obtengan y su patrimonio se destinen exclusivamente a los fines de su creación y en ningún caso distribuyan beneficios, utilidades o bienes entre sus asociados."

ANÁLISIS

Guatemala cuenta a la fecha, con más de 800 mil asociados a la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios Varios de Guatemala, Responsabilidad Limitada, conocida también como FENACOAC-MICOOPE. Esta instancia aglutina a cooperativas de ahorro y crédito en todo el país, a través de las cuales se promueve el desarrollo económico y social en comunidades rurales de todo el país.

A la fecha, las cooperativas están operando con un tratamiento tributario desigual con el Sistema Financiero Tradicional, cuando tanto las cooperativas, como las entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos, realizan operaciones similares. Cuando se emitió el Decreto 26-95 del Congreso de la República, se creó el impuesto específico que grava los ingresos por intereses de cualquier naturaleza y que se paguen o acrediten a cuenta a personas individuales



00000021

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

o jurídicas, sin embargo, este decreto, especificaba que se eximía a las entidades No sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.

Las cooperativas, realizan operaciones de ahorro y crédito iguales que las que realizan las entidades bancarias y financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos, sin diferenciar el fondo o la forma, salvo las derivadas de la naturaleza de entidades de desarrollo que son las cooperativas, y en las cuales los propietarios al final de cuentas de la empresa cooperativa, organizada conforme a la ley, son sus asociados.

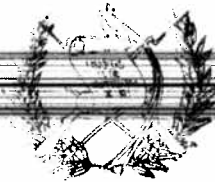
La modificación al artículo 9, del Decreto 26-95, por medio del cual se dejó fuera de las exenciones del impuesto de productos financieros a las cooperativas ha causado confusión con las autoridades tributarias. La SAT está exigiendo el pago del IPF en todas las operaciones que realizan las cooperativas, violándose el principio constitucional de equidad e igualdad tributaria, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Desde el punto de vista técnico, las cooperativas realizan operaciones de ahorro y crédito de igual naturaleza que la de los bancos y financieras supervisadas. El ente fiscalizador de las cooperativas es el INGECOOP y las operaciones y movimientos de capitales son supervisados por la Superintendencia de Bancos.

Si se considera el impacto que pudiera causar la exención en la recaudación, la Superintendencia de Bancos, en el dictamen 17-2009 enviado a la Comisión de Economía y Comercio Exterior, indica que:

"Derivado de la naturaleza de las operaciones que realizan las cooperativas de ahorro y crédito, en el caso de intereses sobre préstamos percibidos, existe dificultad para que sus asociados puedan cumplir con retenerles el impuesto sobre productos financieros, por tratarse de personas que no reúnen los requisitos para ser agentes de retención. En las leyes tributarias aplicables, no existen procedimientos establecidos para que las cooperativas hagan efectivo el pago del impuesto sobre productos financieros percibidos (autoretención)."

La misma entidad, presentó un informe sobre la estimación del IPF sobre intereses reportados en los estados de resultados de las cooperativas de ahorro y crédito en los años 2007 y 2008. Y concluye que el monto de ingresos registrado como intereses por préstamos e inversiones en los 2007 y 2008 suman Q594.0 y Q660.0 millones respectivamente. Estas sumas generaron un impuesto sobre productos financieros de Q59.0 y Q66.0 millones en cada año. Los asociados no retienen el impuesto sobre intereses que pagan las cooperativas provenientes de préstamos, por carecer de la calidad de agente retentor y tampoco las cooperativas lo enteran al Fisco, por no existir disposiciones legales para efectuar autoretención; sin embargo, como se ha señalado, estos intereses provienen de operaciones realizadas directamente con sus asociados, y por lo mismo, están exentos del ISR y del IVA. De aprobarse la reforma propuesta, dichos montos del



00000022

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

impuesto no afectarían al Fisco, ya que en la actualidad no se realizan retenciones a este respecto.

En el Decreto número 26-95, en su literal c) del artículo 9, se definieron entes exentos y fue así como se declaró exentas del Impuesto sobre Productos Financieros a las Cooperativas pero incluyó bajo el techo de esa exención, a toda una gama muy variada de organizaciones que también se beneficiaban de la exención y cuya naturaleza difiere de las actividades que realizan las Cooperativas y particularmente de Ahorro y Crédito que realizan actividades de intermediación financiera amparadas en la Ley General de Cooperativas (Decreto 82-78). Estas actividades son similares en su forma y fondo a las que llevan a cabo las entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos. La exención decretada a favor de las Cooperativas tenía sustentación filosófica, ética y legal porque su actividad está regulada por una Ley específica y cuando paga y acredita intereses a sus asociados está realizando una actividad con base y con fundamento en Ley y estatutos exactamente igual a la que realiza los entes supervisados o fiscalizados por la Superintendencia de Bancos, con la sola diferencia de que el ente supervisor y fiscalizador de las Cooperativas lo constituye la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, que es un ente creado por el Congreso de la República al tenor de los artículos 53, 54 y 55 de la Ley General de Cooperativas.

El haber suprimido a las Cooperativas de la exención original del año 1995, llega concluir que se está violando o se cayó en inobservancia del principio de igualdad contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de la República.

En este sentido hay jurisprudencia sustentada y reiterada por la Corte de Constitucionalidad que ha definido así: *"El principio de igualdad significa entonces un derecho a que no se establezcan excepciones que excluyan a unos de los que se concede a los otros en iguales circunstancias"* (Sentencia del 6 de agosto de 1991, expediente 34-91). Asimismo, la referida Corte ha dicho que, *"el principio de igualdad, plasmado en el artículo 4 de la Constitución Política de la República impone que situaciones iguales sean tratadas normativamente de la misma forma, y sigue sosteniendo que la igualdad ante la Ley consiste que no debe establecerse excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias... lo que puntualiza la igualdad es que las leyes deben tratar de igual manera a los iguales en iguales circunstancias."*

OPINIONES RECABADAS

La Comisión de Economía y Comercio Exterior solicitó la opinión de diversas instancias de las cuales opinaron lo siguiente:

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En dictamen No. 17-2009 de fecha 15 de mayo del presente año, la Superintendencia de



00000025

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Bancos hace un análisis de las iniciativas 3975 y 4026. Se recoge en este dictamen, la opinión de la SIB manifestada en la parte IV Conclusiones, del dictamen, punto 4:

"Las cooperativas constituyen personas jurídicas que generan diversas fuentes de empleo y contribuyen al desarrollo de la actividad económica del país, de tal manera que con la exención se les dotaría de más recursos para que puedan ampliar el volumen de sus operaciones, y se generaría mayor crecimiento en su actividad económica, redundando en beneficio para sus asociados. Además desde el punto de vista constitucional, "es deber del Estado fomentar y proteger la creación y funcionamiento de las cooperativas, proporcionándoles la ayuda técnica y financiera necesaria. En ese sentido, la exención planteada, contribuiría a que el Estado de cumplimiento a esa obligación constitucional."

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

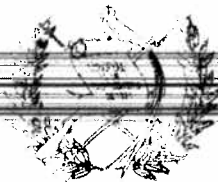
En dictamen de fecha 15 de mayo del 2009, enviado al Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, el Ministerio de Finanzas Públicas manifiesta que: *"es razonable restituir, dentro de las exenciones del Impuesto sobre Productos Financieros, a las cooperativas, pero solo para aquellas constituidas como de ahorro y crédito, con el objeto que tengan un trato igual a las de las entidades que son fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos."*

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

En dictamen conjunto D-SAT-33-2009, los señores directores de la SAT, se pronunciaron desfavorablemente en relación a la implementación de las Iniciativas de Ley No.3975 y 4026, que disponen aprobar las reformas al Decreto 26-95 del Congreso de la República, debido a que las cooperativas ya gozan de la exención al impuesto sobre la renta sobre estos intereses, además que contraviene lo contenido dentro de los Acuerdos de Paz y el Pacto Fiscal en donde se contempla la eliminación de exoneraciones, exenciones y beneficios fiscales.

FEDERACION DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

En dictamen Ref. GG-073/2009, el Lic. Oswaldo Oliva, Gerente General de MICOOPE, indicó la opinión de FEDECOCAGUA con el fin que se de apruebe por parte del Congreso de la República la Iniciativa de Ley 4026, por medio de la cual se modificaría el artículo 9 del Decreto 26-95. En dicho dictamen se hace hincapié de la necesidad de añadir un inciso a dicho artículo, de lo contrario más de ochocientos mil personas asociadas al movimiento cooperativista de Guatemala, se verían afectadas pues no pueden hacer frente al pago del impuesto de productos financieros. La petición expresa de la institución, es que las cooperativas sean tratadas de la misma manera que las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos.



00000024

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*


CONCLUSIÓN

Con base a lo antes expuesto, en lo considerado y al tenor de lo preceptuado por el artículo 112 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto No. 63-94 del Congreso de la República, la Comisión de Economía y Comercio Exterior, emite **DICTAMEN FAVORABLE** respecto a la iniciativa de Ley 4026 por medio de la cual se reforma el artículo 9 del Decreto 2695 del Congreso de la República.

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.




Mariano Rayo Muñoz
PRESIDENTE

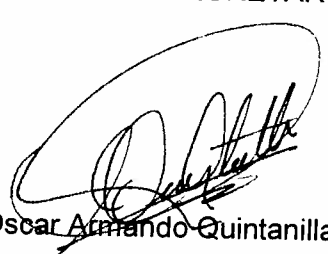


Ricardo Antonio Sarayia Torrebiarte
VICEPRESIDENTE

Lester Abigahil Reyna Girón
SECRETARIO



Jorge Méndez Herbruger



Oscar Armando Quintanilla Villegas



José Alejandro Arevalo Alburez



Oliverio García Rodas

Christian Michael Ros Acevedo



Fredy Viana Ruano



00000025

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Eduardo Genis Quej Chen

Roberto Ricardo Villate Villatoro

Carlos Rafael Flón Morales

Rubén Eduardo Mejía Linares

Rosa María Angel Madrid de Frade

César Leonel Soto Arango

César Augusto Del Aguila López

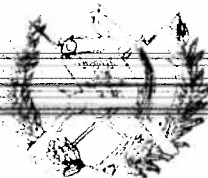
Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona

Christian Jacques Boussinot Nuila

Carlos Santiago Nájera Sagastume

Manuel De Jesús Barquín Durán

William Rubén Recinos Sandoval



00000026

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DECRETO NUMERO ____-2009

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Considerando

Que los impuestos deben regirse por los principios constitucionales de equidad y justicia tributaria, de igualdad o de generalidad, que no sean confiscatorios y no hagan incurrir a los contribuyentes en situaciones de desigualdad.

Considerando

Que la Constitución Política de la República en su artículo 118 establece que es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional.

Considerando

Que la Constitución Política de la República en su artículo 119 literal e), establece dentro de las obligaciones fundamentales del Estado, la de fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas proporcionándoles la ayuda técnica y financiera necesaria.

Considerando

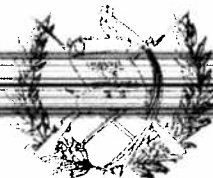
Que el principio de igualdad, plasmado en el artículo 4 de la Constitución Política de la República impone que situaciones iguales sean tratadas normativamente de la misma forma, y que la igualdad ante la Ley consiste que no debe establecerse excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias.

Por tanto,

Con base en las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a) de la Constitución Política de la República,

Decreta:

Artículo 1. Se adiciona la literal c) al artículo 9 del Decreto 26-95 del Congreso de la República Ley del Impuesto sobre Productos Financieros, la cual se leerá así:



00000027

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

"c) Las cooperativas legalmente autorizadas, siempre que la totalidad de los ingresos que obtengan y su patrimonio se destinen exclusivamente a los fines de su creación y en ningún caso distribuyan beneficios, utilidades o bienes entre sus asociados."

Artículo 2. El presente decreto entra en vigencia a los ocho (8) días de su publicación en el Diario Oficial.

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA ____ DEL MES ____ DE ____.